

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FRENTE A LOS ACTUALES DESAFÍOS DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

INSTITUTO GUSTAVO CARVAJAL MORENO
DE FORMACIÓN POLÍTICA

CONSEJO CONSULTIVO

JUNIO 29, 2026

INTRODUCCIÓN

En seguimiento de la convocatoria de la Presidencia de la COPPPAL hecha a la XLIII Reunión Plenaria por el senador Alejandro Moreno en la Reunión de Coordinación General, el pasado 7 de mayo, relativa a proponer a los partidos políticos integrantes de nuestra Conferencia, plantear acciones capaces de conformar una hoja de ruta para fortalecer la gobernabilidad democrática de nuestra América, el Consejo Consultivo del Instituto Gustavo Carvajal de Formación Política, se reunió en días pasados con el fin expresar las ideas que se condensan en el presente documento.

Este texto recoge esas primeras reflexiones en la materia que tienen por objeto animar el debate interno acerca de temas tan relevantes como el colapso de los sistemas de partido que, salvo honrosas excepciones, se ha generalizado en el continente americano, en enlace directo con la pérdida del centro político en la vida pública de las naciones. Un centro político entendido no en un sentido ideológico, sino en su carácter de espacio conformado por y para los acuerdos o consensos fundamentales que permiten la gobernabilidad de las democracias pluralistas y constitucionales.

En las deliberaciones del Consejo se observó que existe una alta correlación entre el derrumbe de los sistemas de partidos políticos y las incrementales crisis de gobernabilidad democrática que se manifiestan en América Latina y el Caribe. Una situación que finalmente contribuye a debilitar al Estado nación en la zona, en un contexto de reacomodo político global, perfilado por la conformación de áreas de influencia preferentes de las grandes potencias, mismas que derivan en una tendencia a conformar nuevos bloques de poder más o menos excluyentes.

Una circunstancia, esta última, que encuentra a nuestra América más desintegrada y cada vez con menor peso en la toma de decisiones planetarias, aunque no por eso menos atractiva a los intereses externos. Un subcontinente cuyos países están obligados a responder, una vez más, a una crucial pregunta: ¿ante las nuevas tendencias de reacomodo geopolítico mundial, en qué calidad nuestros países participarán en ellas: como naciones soberanas o como colonias o protectorados?

La anterior pregunta, así como todas aquellas que se encuentran implícitas en las líneas anteriores ameritan ser respondidas por el progresismo desde una posición autocrítica, en favor de una democracia radical para ser integral. Una posición que no asuma que el populismo autoritario que lastima nuestras democracias, desde sedicentes adscripciones de izquierdas o de derechas, llegó a nuestras Repúblicas en medio de un lindo día soleado, sino que justamente fueron las insuficiencias y desviaciones meramente electoreras de nuestras democracias incompletas, las que le abrieron la puerta y lo invitaron a entrar.

En particular el progresismo democrático, defensor de la libertad igualitaria solidaria, pluralista y refractaria a todo autoritarismo, debe pintar su raya, por así decirlo con toda claridad, a partidos políticos que llegaron al poder por medio de la democracia para traicionarla y detonarla desde dentro para mantenerse en el poder, por el poder mismo. Ha llegado la hora de asumir con toda seriedad que el gran clivaje que distingue, define y ubica a toda propuesta u organización progresista, por encima de cualquier justificación ideológica o de poder, es su compromiso irrestricto con la democracia y, por tanto, con su defensa, acatamiento y salvación. Cualquier otra equidistancia, es mera simulación. De ahí que en particular denunciemos y nos oponemos a toda acción que, vestida de izquierda, destruya a la democracia. Eso es sólo autoritarismo emboscado o simple traición. No combatirlo, hará más difícil recuperar el terreno perdido y terminará por entregar todas las plazas a la derecha extrema.

DESARROLLO

La crisis contemporánea de la democracia no puede analizarse únicamente desde la óptica electoral o institucional. Se trata, en realidad, de una crisis más profunda de representación, de confianza y de sentido histórico, que sus enemigos profundizan y aprovechan para ganar posiciones en la actual guerra por la hegemonía cultural, desatada por la extrema derecha en Occidente. Durante décadas, los partidos políticos fueron los grandes articuladores de las demandas sociales y los principales vehículos de movilidad, participación y construcción colectiva. Hoy, en buena parte del mundo, amplios sectores ciudadanos —especialmente jóvenes— perciben que esas estructuras dejaron de representar sus aspiraciones y preocupaciones cotidianas y, sobre todo, dejaron de ser solución a sus problemas básicos.

En consecuencia, ha crecido el desencanto democrático y, con ello, la antipolítica. Millones de ciudadanos ya no sienten que la política tenga capacidad real de transformar sus vidas. Y cuando las personas dejan de creer en la utilidad de las instituciones democráticas, entonces se vuelven más permeables a discursos mesiánicos y autoritarios. El aumento permanente del abstencionismo electoral es un fiel indicador de lo comentado.

De ahí que el gran desafío del presente no se limite a modernizar partidos políticos, sino que debe ser parte de una tarea de fondo: reconstruir la legitimidad democrática. La democracia no sobrevive solamente por sus normas o procedimientos; sobrevive porque las sociedades creen en ella como instrumento útil para canalizar conflictos, garantizar libertades y construir bienestar colectivo. Cuando esa convicción se erosiona, emergen actores que pretenden sustituir la deliberación democrática por el liderazgo personalista propio del populismo, por el poder económico concentrado y ahora, cada vez más, por el control tecnológico oligárquico que busca apropiarse del mundo.

1. Nuevo orden internacional y debilidad geopolítica en América Latina y el Caribe

El presente reacomodo geopolítico global, encuentra a una América Latina y al Caribe en desunión, la mayoría de sus países concurren a dicho proceso con Estados debilitados, economías inestables y sociedades desesperanzadas. A diferencia de ciertas naciones de Asia, Medio Oriente o incluso África, que han emergido como potencias medias regionales, la mayoría de los países latinoamericanos han perdido relevancia ante los desafíos planetarios.

Con sus fortalezas anestesiadas por las debilidades de su organización política, una vez más la región se sitúa como un escenario de disputa entre grandes potencias en el marco de la tendencia mundial a prescindir de un marco multilateral de reglas -esas que permitieron construir la paz de la posguerra- para avanzar hacia una inestable correlación de zonas de influencia. En ese contexto, América Latina y el Caribe parecieran resignadas a repetir su histórica incapacidad para consolidarse en una potente unión continental propia para asumir su inevitable inscripción en alguno de los bloques globales en formación.

En el corto plazo, el desenlace de este tránsito geopolítico dependerá primero de la comprensión del problema y luego del empeño y la capacidad que cada país se imponga para alcanzar un sano fortalecimiento institucional de sus Estados, concomitante al robustecimiento de sus economías y de su cohesión social. Todo lo cual amerita hacerse un cuestionamiento fundamental: ¿Cómo queremos formar parte de alguno de esos bloques, en condiciones de países soberanos o lo haremos como colonias?

De ahí que la COPPPAL, en su calidad de organización de partidos políticos, esté obligada a contribuir de manera destacada a la conformación de esa respuesta en sentido soberano. Lo cual implica hacer una valoración de la situación del sistema de partidos en América Latina y el Caribe que, en general, sufre de una crisis estructural de representación, estrechamente vinculada con la calidad (o el deterioro) de la democracia.

2. Crisis estructural de los sistemas de partidos políticos

Existe una correlación directa entre el deterioro de los sistemas de partidos y la baja calidad de la democracia en la región. Es una crisis estructural que se manifiesta a través de patrones identificables:

Tenemos sistemas de partido que sufren de una fragmentación extrema, caracterizados por un exceso de partidos débiles y volátiles, que dificultan la generación de mayorías legislativas y crean ingobernabilidad.

El comportamiento partidario de las últimas décadas se ha caracterizado por un creciente abandono del territorio en favor de una cada vez mayor dominancia del aire, lo cual entre otros aspectos dificulta y limita el surgimiento de liderazgos representativos de las poblaciones desde su hábitat y privilegia la inflación de candidaturas de “Instagram”, con escaso contenido ideológico y político, y nulo o muy poco compromiso con sus votantes.

De manera concomitante, asistimos al colapso sin sustitución de los partidos tradicionales. Los partidos históricos pierden identidad, base social y capacidad organizativa, y son reducidos a *vehículos electorales* que abandonan sus estructuras ideológicas, para reforzar la frivolidad que vive la política, que se vacía de contenido y, por tanto, de liderazgo ante ciudadanías que demandan rumbo, sin obtener respuestas.

América Latina y el Caribe han perdido el predominio de los sistemas de partido estables que existieron a lo largo del siglo XX, constituidos por sistemas institucionalizados, bipartidistas, e incluso de partidos hegemónicos. Desde la transformación de los otrora partidos de masas en partidos “atrapa todo”, la conducta partidaria ya se venía orientando cada vez menos por la ideología o por la doctrina que inspiraba sus programas, que por la variopinta naturaleza de las demandas que deseaban capturar: **ya no se buscaba la representación, se practicaba la mimetización.**

En paralelo, los periódicos también dejaron de ser afines a una ideología para actuar en la misma lógica de los partidos: en razón de la demanda, sobre la cual se incentivaba los temas propios. Comenzaron con éxito a disputar a los partidos la organización de la conversación pública. Se conforma entonces un circuito entre partidos que quieren influir en la opinión pública mediante los medios independientes para dirigir su mensaje a sus posibles votantes y los medios que quieren influir a los partidos y a sus públicos.

Mientras tanto, el ciudadano paulatinamente va delegando su condición de actor para convertirse en espectador o consumidor de aquello que los medios y los partidos proponen. Al mismo tiempo los partidos políticos comienzan a abandonar su función pedagógica, olvidan su tarea de educar al soberano en detrimento de la calidad de la política que, desde entonces, no hace sino recorrer un camino descendente cada vez más pronunciado.

En este contexto, en el campo del pensamiento, arriba la posmodernidad y derriba todo el pensamiento estructural hasta ser vencido, ahora todo es desconstrucción, es singular y subjetivo.

En reemplazo de los partidos de masas, aparecen los liderazgos personalistas por sobre la institucionalidad. El carisma se sitúa por sobre los equipos y los planes. Cada vez más, desde entonces, las encuestas mandan. Las razones del proyecto ya no cuentan, menos aún los valores y los principios. Irrumpe la etapa de la política espectáculo o la video política, como denominan algunos autores, favoreciendo los cantos de sirena de los populismos, que pronto ocupan mayoritariamente, la oferta electoral. La fragmentación social se profundiza hasta el punto de denominar a la sociedad actual como “líquida” “instantánea” “el imperio de lo fugaz”, junto a la transformación de los ciudadanos en consumidores o usuarios.

Aparecen las redes, y pronto invaden y dominan el espacio de la política; socializan la información y el conocimiento, disputan el campo educativo/científico a los partidos y a los medios tradicionales. Su poder reside en su capacidad para instalar agendas rápidamente, en promocionar figuras desconocidas en corto tiempo hasta convertirlas en candidaturas más o menos eficaces, con poca representatividad real y menos compromiso con sus votantes. Informan y expresan sin necesidad de fundamentar. Enuncian sin rendir cuentas y en ese mundo de verdades subjetivas e improbables, se mueven como peces en el agua. Para los efectos de esta reflexión, el problema de todas esas inasibles capacidades, radica en su eficacia para desplazar a los partidos de su función de comunicar, de enseñar, de agrupar y de socializar, sin proponer ni edificar ninguna instancia institucional sustituta.

El vacío que deja el desplome de los partidos históricos y en general de los partidos representativos del pluralismo territorial y social, daña de manera fundamental el centro de acuerdos y pactos de los sistemas políticos, toda vez que la inmensa mayoría de los partidos emergentes, sobre todo desde el aire, lo hacen bajo pautas de alta polarización y escasa responsabilidad con sus votantes.

Ese vacío de representación, ha provocado una desconexión crítica entre la ciudadanía y la política formal. Mientras las sociedades enfrentan entornos de precarización laboral, exclusión, inseguridad y transformaciones culturales aceleradas, las organizaciones políticas continúan operando bajo lógicas burocráticas, estructuras analógicas y lenguajes anacrónicos incapaces de descifrar las nuevas dinámicas comunitarias.

Todo ello explica que más del 50% de la población manifieste, en la práctica, su insatisfacción con la democracia, y cerca del 50% rechace a las organizaciones políticas, en una correlación directa con el sesgo electorero de las democracias, entronizado en detrimento de emprender estructurales reformas del poder.

Verdaderas e integrales reformas del poder, capaces de transformar el ejercicio del mismo bajo pautas de contrapeso y control ciudadano que permitan a los votantes no sólo sufragar en condiciones de libertad y certeza, sino que les aseguren un mayor grado de transparencia, eficacia y rendición de cuentas en el actuar de sus representantes electos.

Es decir, reformas que alienten y faciliten un real empoderamiento ciudadano concomitante al fundamental compromiso con la edificación de una ciudadanía integral, base impulsora de la democracia ciudadana, y soporte de un eficaz combate a la corrupción y por supuesto a la impunidad.

De ahí que, no obstante que la democracia se acepte como un ideal, existe un rechazo a su ejercicio real que fomenta el voto de castigo, la volatilidad electoral y una mayor tolerancia ciudadana hacia la concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos institucionales, a cambio de promesas de solución.

De esta manera, el vano contenido programático y la ausencia de liderazgos institucionales abre la puerta al populismo autárquico que corrompe las instituciones, abandona políticas y programas. La vida pública tiende a subordinarse a la aleatoriedad carismática del individuo empoderado en turno, desplazando a las plataformas políticas. La antipolítica asume un rol relevante, las sociedades se polarizan al extremo y se destruye el centro como espacio para construir acuerdos representativos de la pluralidad social, el Estado se debilita y con ello la gobernabilidad.

La reconstrucción democrática exige con urgencia recuperar la esencia de la política como el instrumento colectivo mediante el cual las sociedades deciden su propio destino y con ello el importante papel de los partidos políticos en la canalización de la demanda social. Si los partidos no asumen esta misión histórica, otros poderes terminarán ocupando ese espacio a costa de la legitimidad institucional y del imprescindible control ciudadano.

3. Factores causales del deterioro político

A los problemas históricos como la pobreza y la corrupción en la región, se suma que los partidos se han convertido en simples maquinarias electorales. Al perder legitimidad, el espacio es llenado por el personalismo, el populismo extremo y/o la captura del poder por intereses criminales del narcotráfico internacional.

La crisis política en América Latina y el Caribe no es una situación coyuntural, sino que responde a un deterioro estructural que amenaza con ser terminal. La transición de "democracias de partidos" hacia "democracias de líderes, redes y opinión pública fragmentada" bloquea la agregación de demandas sociales y desmantela la intermediación política fundamental para el Estado de derecho.

Ese estado de vulnerabilidad institucional actual responde a múltiples factores internos y externos:

- La corrupción sistemática, que erosiona la legitimidad de los partidos y facilita la **captura del Estado** por intereses particulares, especialmente en sociedades caracterizadas por la desigualdad y la exclusión.
- El financiamiento ilícito en sistemas institucionales con escasos mecanismos de control, que daña la competencia política y refuerza la captura institucional.
- La violenta infiltración de las redes del narcotráfico y el crimen organizado nacional e internacional en el Estado que, mediante el financiamiento ilícito de campañas y la coacción de la competencia política, lo debilita activamente y consolida su captura.
- La caída de las identidades ideológicas fuertes inducida por la posmodernidad, que ha convertido a la política en un espectáculo dominado por las redes sociales, la manipulación digital y la desinformación.
- La verdad objetiva sustituida por la eficacia emocional y mediática de los algoritmos.
- Las deficiencias estructurales graves con las que operan los partidos políticos, caracterizadas por la falta de formación de cuadros, la ausencia de renovación generacional y la carencia democrática de vida orgánica interna y de debate ideológico y programático.

- En síntesis, el debilitamiento de nuestros sistemas de partido, en particular bajo el nocivo tamiz del populismo que se generaliza, incrementa la confrontación, alienta la polarización y el conflicto institucional, lo que termina por destruir las democracias y debilitar cada vez más a los Estados.

Sin partidos sólidos que canalicen las demandas, la protesta social espontánea tiende a sustituir la representación formal, lo que debilita la gobernabilidad interna de las naciones y las deja en una posición vulnerable frente a los intereses de las potencias globales.

4. Impacto del transhumanismo en la crisis democrática

Los partidos políticos erróneamente han asumido que la crisis actual es meramente comunicacional. En realidad, se trata de una crisis filosófica, moral y estructural en la que millones de ciudadanos perciben que las decisiones fundamentales ya no las toman los gobiernos electos, sino poderes económicos y tecnológicos que no rinden cuentas ante nadie.

Paralelamente, corporaciones y sectores vinculados al poder tecnológico global pugnan por establecer visiones excluyentes y autárquicas donde la democracia representativa es vista como un modelo lento e ineficiente frente a la velocidad del capital y la innovación, incluso manifiestan que la democracia es incompatible con la libertad, y amenazan con reemplazar progresivamente la soberanía popular por formas de gobernanza tecnocrática-feudal, condicionadas por el control de datos y la concentración extrema de la riqueza.

Este avance desregulado no solo amenaza con sustituir la soberanía popular por formas de gobernanza detentadas por oligarquías propietarias del control de datos, sino que introduce un desafío aún más profundo: el debate en torno al **transhumanismo y el posthumanismo**, impulsado por estos mismos sectores corporativos y tecnológicos globales. Estas corrientes plantean la modificación y superación de la condición humana a través de la tecnología como un producto de mercado exclusivo.

Así, el control del futuro humano quedaría en manos de grandes corporaciones tecnológicas, cuyo poder económico y de manejo de datos supera al de muchos Estados nación, debilitando la capacidad de los gobiernos para garantizar el bienestar general, dentro de un tenebroso futuro distópico determinado por una suerte de segregación bio-orgánica de los seres humanos, donde una casta de superhumanos condiciona y usufructúa la existencia del resto.

El riesgo para una región marcada por las profundas deudas sociales de América Latina y el Caribe resulta especialmente preocupante, pues la incorporación de estas tecnologías sin un marco regulatorio soberano agravaría las desigualdades históricas existentes.

Si las posibilidades de mejora biológica, cognitiva o de extensión de la longevidad dependen sólo de la capacidad adquisitiva y de las dinámicas del mercado, la brecha social dejaría de ser únicamente económica o educativa para convertirse también en una desigualdad de carácter biológico, configurando una nueva y extrema división social con base en el desigual acceso a la tecnología.

Las preocupaciones sobre el posible “fin de lo humano” surgen en países altamente desarrollados y no se manifiestan de igual forma en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. La región necesita asumir una posición estratégica, crítica y prudente frente al avance tecnológico. Esto supone promover el desarrollo y la incorporación de tecnologías de vanguardia, como la Inteligencia Artificial, en todos los ámbitos, pero garantizando al mismo tiempo la protección y la dignidad de la persona humana.

La velocidad acelerada del desarrollo tecnológico supera ampliamente la capacidad de respuesta y de regulación de los parlamentos. Como consecuencia, decisiones fundamentales relacionadas con la edición genética o la inteligencia artificial comienzan a trasladarse desde los representantes elegidos democráticamente hacia espacios dominados por los expertos, científicos y grandes corporaciones tecnológicas, debilitando así el papel de la soberanía popular en la toma de decisiones.

En este contexto, la respuesta política ante la era digital no puede aplazarse y debe basarse no en el rechazo a la tecnología ni tampoco en aceptar sin cuestionamientos la rectoría única de las reglas del mercado. Lo fundamental es crear normas y principios éticos que aseguren que la innovación tecnológica contribuya al bienestar colectivo, a la justicia social y al fortalecimiento de la vida pública, evitando deshumanizar las relaciones sociales y políticas.

5. La recuperación de la soberanía democrática en la era del poder global privado

Durante gran parte del siglo XX, el debate político giró alrededor del equilibrio entre Estado y mercado, entre libertad e igualdad, entre desarrollo económico y justicia social. Sin embargo, el siglo XXI ha introducido una nueva variable que modifica radicalmente esa discusión: la aparición de poderes privados globales (grandes corporaciones), cuya capacidad de influencia supera, en numerosos ámbitos y a veces con creces, la de muchos Estados nacionales.

Las grandes corporaciones tecnológicas, los fondos internacionales de inversión, las plataformas digitales, los sistemas globales de información y las nuevas arquitecturas de inteligencia artificial participan crecientemente y de forma acelerada en la formación de la opinión pública, en la circulación del conocimiento, en la administración de datos personales, en la orientación de decisiones económicas y políticas que afectan directamente la vida democrática, a tal punto de incidir en los propios resultados electorales de las naciones.

Este fenómeno plantea una interrogante inédita para el pensamiento progresista y democrático latinoamericano: ¿puede existir una democracia plena cuando una parte significativa del poder efectivo se encuentra fuera del alcance de la deliberación ciudadana y del control institucional?

La defensa de la democracia en el siglo XXI exige ampliar el concepto clásico de soberanía. Ya no basta con proteger las fronteras territoriales ni con preservar la independencia frente a otros Estados. Resulta igualmente indispensable proteger la capacidad de las sociedades para decidir autónomamente sobre sus datos, sus infraestructuras digitales, sus procesos electorales, sus recursos estratégicos y el desarrollo ético de las nuevas tecnologías.

La soberanía democrática debe entenderse hoy como la capacidad efectiva de los pueblos para mantener bajo control ciudadano aquellas decisiones fundamentales que condicionan su presente y su futuro.

Desde esa perspectiva, la COPPPAL debe impulsar una agenda regional sobre soberanía digital, gobernanza ética de la inteligencia artificial, protección de datos, regulación democrática de plataformas tecnológicas y fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas propias para América Latina y el Caribe.

El objetivo no debe ser frenar el progreso tecnológico ni rechazar la innovación, sino asegurar que el desarrollo científico permanezca subordinado al interés público, a la dignidad humana y a los principios democráticos. La tecnología debe servir a la democracia y al ser humano; nunca sustituirlos.

La historia demuestra que cuando el poder se concentra sin controles termina erosionando la libertad. El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente, diría Lord Acton. Una lección válida para los Estados, que también debe aplicarse a los nuevos poderes económicos y tecnológicos del siglo XXI, para evitar todo atisbo de tiranía tecnológica. La defensa de la democracia exige hoy defender también la soberanía ciudadana frente a esas nuevas formas de concentración global del poder.

6. Agenda estratégica continental de la COPPPAL

La restauración del orden democrático exige asumir que la intermediación política es la columna vertebral del Estado democrático de derecho. Si los partidos no recuperan su misión histórica de canalizar de forma pacífica las demandas sociales, otros poderes fácticos —económicos, tecnológicos o criminales— terminarán ejerciendo la dirección de las sociedades sin legitimidad democrática ni fiscalización ciudadana.

Ante esta responsabilidad histórica se requiere transitar de las declaraciones generales a la implementación de acciones concretas, coordinadas y permanentes a nivel continental. Una agenda estratégica regional orientada a refundar la legitimidad social y la representación política que puede articularse en torno a once líneas prioritarias:

1. **Plataforma regional de formación y liderazgo juvenil:** Instituir en cada partido político integrante de la COPPPAL, un brazo de una escuela continental de formación política, ética pública y liderazgo democrático que emplee herramientas presenciales y digitales para incorporar a las nuevas generaciones que no encuentran espacio en las estructuras analógicas tradicionales.

2. **Observatorio sobre democracia digital y poder tecnológico:** Crear en la COPPPAL un centro permanente de análisis sobre inteligencia artificial, manipulación digital, financiamiento tecnológico de la política y la desinformación, con la finalidad de formular propuestas regulatorias comunes para los Estados de la región.

3. **Estándares regionales de transparencia partidaria:** Promover en cada partido y país mecanismos obligatorios de transparencia financiera, fiscalización de recursos, elecciones internas democráticas y esquemas de rendición de cuentas que garanticen la participación equitativa de mujeres y jóvenes.

4. **Modelo de partido territorial y comunitario:** Abandonar el esquema de partidos limitados a periodos de campaña electoral y redes sociales, adoptando un modelo de presencia comunitaria permanente enfocado en la gestión social, educativa, ambiental y cultural en los territorios. Partidos políticos de tiempo completo, en todo lugar, en todo momento, todo el tiempo.

5. **Construcción de una narrativa democrática regional:** Diseñar una estrategia de comunicación moderna, accesible y emocionalmente inteligente que defienda los valores de la democracia, la libertad y la justicia social de manera solvente, haciendo frente a las simplificaciones radicales y extremistas.

6. **Soberanía económica y combate a la desigualdad:** Impulsar acuerdos y políticas regionales orientados a la creación de empleo, la protección de las clases medias, el desarrollo tecnológico propio y el fortalecimiento de las capacidades productivas locales frente a las dinámicas globales de concentración de riqueza.

7. **Mecanismo permanente de defensa democrática:** Consolidar una instancia regional de alerta temprana, observación política y acompañamiento institucional con capacidad de respuesta ágil frente a amenazas autoritarias, intentos de ruptura constitucional o la captura de los aparatos estatales por intereses antidemocráticos.

8. **Carta democrática sobre soberanía digital e inteligencia artificial para América Latina y el Caribe:** Impulsar desde la COPPPAL un instrumento regional que establezca principios comunes sobre regulación ética de la inteligencia artificial, protección de datos personales, transparencia algorítmica, límites a la manipulación digital y preservación de la soberanía democrática frente a la concentración tecnológica global.

9. **Por una democracia refractaria tanto al neoliberalismo, como al populismo:** Ambas son distorsiones que, a pesar de sus diferencias, socavan desde distintos frentes las instituciones democráticas, sus principios y valores. Debemos impulsar una democracia social profundizada hacia el empoderamiento ciudadano, equidistante de esos dos males que han enfermado a Occidente en general y nuestra América en particular.

10. **Profundizar la democracia social que defiende la COPPPAL para lograr una democracia ciudadana:** Se trata de empoderar al ciudadano, de hacer valer a plenitud los principios de libertad con igualdad a partir de proyectar la igualdad política y jurídica, inherente a su condición de ciudadanía, para producir igualdad real: económica y social, comenzando por asegurar la igualdad de capacidades como base de la justicia social.

11. **Hacia la conformación de un nuevo pacto político y social de poder ciudadano:** la crisis estructural que padecen nuestros sistemas políticos exige orientar nuestro marco programático hacia el logro de opciones fundantes de nuestra legitimidad que restituyan la esperanza en el apetito aspiracional de la ciudadanía proyectando valores republicanos, de libertad con igualdad, de justicia jurídica y social, de equilibrio de poderes, así como de control ciudadano de su ejercicio, como respuestas eficaces y tangibles en la solución de sus demandas.

Esto se logra al impulsar en cada régimen político, una transformación del ejercicio del poder en favor de una ciudadanía organizada, sustantiva, que posea mecanismos permanentes y vinculantes sobre las decisiones públicas, más allá del acto electoral. Una ciudadanía que potencia su libre albedrío en la igualdad de capacidades, para ejercerlo a plenitud.

Libertad con igualdad, es la expresión tangible de la ciudadanía integral, política, jurídica, económica y social, antes referida, misma que demanda: Derechos sociales garantizados (educación, salud, ingreso mínimo, tiempo cívico); Mecanismos de participación vinculante (no solo opinión, sino decisión); Control ciudadano del poder (revocación, fiscalización, rendición de cuentas). Sin estas condiciones, la ciudadanía se vacía y la libertad con igualdad se vuelve retórica.